

La crisis del neoliberalismo mexicano

Arturo Huerta G.*

Cuestionando la política económica del gobierno mexicano en el marco de una crisis más grave que la ocurrida en 1982, el autor señala las falacias del neoliberalismo en México, con énfasis en la incapacidad endógena de acumulación de este modelo; el peso de los recursos externos para atender los objetivos de estabilidad y crecimiento; la inexistencia de una política crediticia flexible; el agotamiento de las políticas que atraían capitales; la falta de confianza ante los problemas económicos, políticos y sociales y la incapacidad de la economía para hacer frente a los pasivos externos. El ensayo concluye planteando cinco alternativas para hacer frente a la crisis actual.

By examining the Mexican government's economic policy in the context of a worse crisis than the one of 1982, the author highlights the fallacies of neo-liberalism in Mexico, with emphasis on this model's inherent inability to accumulate capital; the importance of external funds in meeting the objectives of stability and growth; the lack of a flexible credit policy; the invalidity of policies which once attracted capital; the lack of confidence due to the country's economic, political and social problems and the economy's inability to meet its external liabilities. The essay concludes by proposing five alternatives to solve the current crisis.

En mettant en question la politique économique du gouvernement mexicain, dans le cadre d'une crise plus grave encore que celle de 1982, l'auteur souligne les leurres du néo-libéralisme au Mexique et insiste sur l'incapacité endogène d'accumulation de ce modèle, ainsi que sur l'importance des ressources extérieures permettant de répondre aux objectifs de stabilité et de croissance, sur l'inexistence d'une politique de crédit flexible, sur l'épuisement des tactiques destinées à attirer les capitaux, sur la crise de confiance issue des problèmes économiques, politiques et sociaux et sur l'incapacité pour l'économie de faire face à la dette extérieure. En conclusion, l'auteur propose cinq solutions possibles pour affronter la crise actuelle.

* Profesor de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM.

Causas de la problemática económica actual el país

Introducción

La sociedad mexicana está resintiendo de nuevo otro engaño más del gobierno. Por muchos años se nos dijo que la política económica de apertura comercial, de desregulación y liberalización económica, así como de privatizaciones de empresas públicas, generaría condiciones de crecimiento sostenido en beneficio de todos los mexicanos; ello ha implicado sacrificios por parte de la gran mayoría de los sectores sociales; muchos de los productores han tenido que cerrar y reestructurar sus plantas productivas ante su incapacidad de competir frente a importaciones. Dicho proceso ha repercutido en menor crecimiento productivo, mayor desempleo, así como menores salarios reales y gran vulnerabilidad externa.

La venta de empresas públicas no se tradujo en la modernización de las únicas empresas estratégicas que quedan —Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La entrada de capitales promovida por la privatización, como por la liberalización de la economía, no originó mayor disponibilidad crediticia, ni mayor inversión para retomar el crecimiento sostenido de la economía para la generación de empleos bien remunerados. Por el contrario, dicho capital se recicló al exterior a través del gran crecimiento de importaciones promovido por el contexto de economía abierta y por el tipo de cambio sobrevaluado que venía prevaleciendo; los beneficiados por el sacrificio de los sectores productivos y de los asalariados y desempleados, así como por la venta de empresas públicas y la entrada de capitales al país, han sido los industriales y exportadores de Estados Unidos, al igual que los nuevos propietarios de los activos vendidos y liberados.

La nueva crisis que enfrenta la economía es una prolongación de la ocurrida en 1982, ya que sigue manifestando fuertes rezagos productivos, presiones sobre el sector externo y altos niveles de endeudamiento externo, ahora mayores que en el pasado.

La economía, al no tener capacidad productiva y financiera para mantener baja inflación y cierto crecimiento, recurre a promover la entrada de capitales; ello llevó al gobierno a acentuar el proceso de privatización de empresas públicas, así como la liberalización y desregulación para promover la entrada de capitales. Así, de

1988 a 1994 se logró reducir la inflación y un cierto crecimiento económico sin haber sustento interno de crecimiento de la productividad y de la producción generalizada; la gran entrada de capitales permitió financiar el déficit del sector externo y el tipo de cambio sobrevaluado. La economía enfrentaba una alta vulnerabilidad externa, ya que al dejar de entrar capitales en la magnitud suficiente para financiar el déficit externo, se manifestaría de nueva cuenta la crisis.

- La incapacidad endógena de acumulación del modelo neoliberal

La situación económica por la que atraviesa el país evidencia el fracaso del modelo neoliberal mexicano para generar condiciones internas productivas y financieras capaces de bajar la inflación y retomar el crecimiento, así como para mantener las políticas de apertura generalizada.

El modelo neoliberal mexicano no tiene ningún sustento endógeno; no ha generado niveles de productividad, ni del ahorro interno, ni ha ajustado el sector externo en la perspectiva de mantener la estabilidad monetaria y el crecimiento en forma sostenida; de ahí la importancia que han desempeñado los cambios estructurales promovidos por el mercado para incentivar la entrada de capitales para financiar el contexto de economía abierta y el déficit externo creciente que ello genera.

Los cambios estructurales de orientación de mercado que se han venido impulsando desde hace doce años, son los que han originado el mayor nivel de endeudamiento externo, así como la menor capacidad de crecimiento, los mayores niveles de endeudamiento externo, los menores niveles de salarios mínimos reales, y menor capacidad de crecimiento presente y futuro de la economía.

Ello contradice a los defensores del modelo neoliberal que a lo largo de los últimos 12 años venían reiterando el hecho que los culpables de la crisis de 1982 eran los llamados gobiernos populistas; en el periodo de los llamados gobiernos populistas (de 1970 a 1981), el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 119%, y en cambio en el periodo de los gobiernos modernistas de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari (de 1982 a 1994), solo se creció en 17%, con un per cápita negativo.

La economía nacional se abrió al contexto internacional en 1986, y en 1987 fueron reducidos aun más los aranceles, instrumentándose a fines de ese año una política cambiaria antiinflacionaria; ello se da en un contexto en que la inversión pública y privada no crecieron de 1982 a 1987. De esta manera se procedió a la economía abierta sin contar con los niveles de productividad y competitividad para hacer frente a la competencia que ello exigía; esto se tradujo en un gran crecimiento de importaciones, que si bien contribuían a bajar la inflación, era a costa de desplazar a la producción nacional del mercado interno y de originar presiones negativas sobre el sector externo.

La apertura externa y el tipo de cambio antiinflacionario (sobreevaluado) no fueron acompañadas de políticas industriales, ni de créditos de largo plazo, ni por bajas tasas de interés para impulsar la necesaria modernización de la esfera productiva para hacer frente a la competencia desleal ya configurada; los resultados se manifiestan en el gran crecimiento de importaciones: de ser 12 000 millones de dólares en 1987, pasaron a ser 48 000 millones de dólares en 1992 y 50 000 millones en 1993; ello llevó a que la economía pasara de un superávit comercial externo en 1987 de 8 700 millones de dólares, a un déficit de 19 000 millones de dólares en 1993 y de 24 000 millones de dólares en 1994.

El gobierno no se preocupaba del déficit externo, debido a que la gran entrada de capitales que lo financiaba, modernizara la planta productiva para así incrementar exportaciones y autocorregir dicho déficit; sin embargo, no se percataban que dicho capital no iba a la esfera productiva, sino que era capital de cartera, que pululaba en la esfera financiera-especulativa. Al no darse la modernización esperada, proseguían las presiones sobre el déficit externo, por lo que crecían los requerimientos de capital externo para su financiamiento y para mantener el tipo de cambio antiinflacionario lo que exigía avanzar en la privatización de las empresas públicas, así como en la liberalización de la economía para que el capital fluyese al país. De tal forma se conformaba un contexto de alta vulnerabilidad externa y de creciente extranjerización de la economía, dadas las concesiones otorgadas a la inversión extranjera; de 1991 a 1993 entraron 100 000 millones de dólares al país, mismos que se reciclaron al exterior vía pago del déficit de cuenta corriente.

- La importancia de los recursos externos para los objetivos de estabilidad y crecimiento

La dinámica económica que ha predominado en el país en las últimas décadas no ha configurado condiciones de ahorro interno, ni menores presiones sobre el sector externo, esto ha llevado a demandar crecientes niveles de endeudamiento externo para mantener la dinámica económica; el pago de las obligaciones con los acreedores internacionales se ha visto comprometido por las constantes presiones sobre el déficit comercial externo que se derivan de las características predominantes de la dinámica económica, el resultado fue que los acreedores internacionales suspendieron flujo crediticio al país, lo cual terminó por manifestar una crisis de proporciones en 1982; en ese año los acreedores internacionales obligaron al país a realizar una drástica política de ajuste recesivo y devaluatorio-inflacionario para generar un superávit comercial para así cubrir las obligaciones financieras. Así, el sexenio de Miguel de la Madrid se caracterizó por ser recesivo e inflacionario, como resultado de no contar con recursos externos para financiar la estabilidad monetaria y el crecimiento económico; al no haber condiciones productivas y financieras internas capaces de cubrir el pago del servicio de la deuda, se procedió a la instrumentación de un tipo de cambio devaluatorio y una política fiscal y crediticia contraccionista, lo cual disminuyó la actividad económica y acentuó la inflación.

Los mecanismos de financiamiento empiezan a cambiar en 1986 a raíz del Plan Brady, instrumentado por el gobierno de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos; en éste se recomienda, promover la entrada de capitales a través de la privatización de empresas públicas, y la liberalización y desregulación económica, con la consecuente disminución de la participación del Estado en la economía.

En el último año de gobierno de Miguel de la Madrid, se instrumenta la política del pacto de estabilización, estableciendo una paridad cambiaria nominal fija, además de disminuir los aranceles y abrir más la economía; ello permitió el crecimiento de importaciones baratas que generaron un proceso de competencia frente a la producción nacional, lo cual llevó a reducir la inflación; la desregulación y liberalización de la economía, se implementan sin que se

instrumente política industrial y crediticia alguna que impulsara el proceso de modernización de la planta productiva nacional para que se pudiera sortear con éxito la competencia con las importaciones. El resultado ha sido destrucción de la planta productiva, mayor desempleo y crecientes presiones sobre el sector externo; así, el superávit comercial pasó de 8 700 millones de dólares en 1987 a ser 1 700 en 1988, lo cual presionó sobre las reservas internacionales para cubrir las obligaciones con los acreedores internacionales. No había viabilidad de continuar con la política cambiaria antiinflacionaria, ya que se reducían los recursos financieros para mantener dicha política.

Cuando toma el poder Carlos Salinas, en vez de revisar la política cambiaria para disminuir las presiones sobre el sector externo y sobre las reservas internacionales, se procede a vender las grandes empresas públicas y a liberalizar más la economía para generar condiciones de confianza para que el capital fluyese a la economía para financiar el déficit externo y la política cambiaria antiinflacionaria.

Las privatizaciones realizadas en el gobierno de Salinas, significaron 23 000 millones de dólares; la liberalización y desregulación de la economía, así como la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras, significó mayor entrada de capitales; México, junto con el resto de países latinoamericanos, entró al circuito de la venta de grandes empresas públicas y a acelerar la integración de la economía nacional a la economía mundial, para atraer capitales y contar con condiciones financieras para establecer políticas antiinflacionarias y de cierto crecimiento económico.

Toda la política económica se refuncionalizó para crear condiciones de rentabilidad y estabilidad monetaria para que viniese capital; la estabilización monetaria-cambiaria era esencial para que el capital fluyese al país. No por nada el gobierno de Salinas nunca devaluó, y era lo último que el gobierno iba hacer, debido a que ello desvalorizaría al capital ubicado en el país; es decir, se entró a una paridad de tres pesos por dólar, ya ante una devaluación, ante un encarecimiento del dólar, perdería; en la medida en que el modelo neoliberal en nuestro país descansa en la entrada de capitales, no se podía proceder a políticas que desvalorizaran dicho capital, pues se generaría una crisis de confianza que llevaría al capital a salir y a dejar de fluir al país, lo que cual generaría una crisis de vastas proporciones, como lo estamos viendo.

El gobierno de Salinas no se preocupó por devaluar para ajustar el déficit externo, ya que había entrada de capitales para su financiamiento, su atención se centró en mantener la estabilidad monetaria-cambiaria para que el capital siguiera llegando al mantener la paridad cambiaria sobrevaluada, incentivaba más el crecimiento de importaciones, lo que además de afectar la planta productiva nacional, acentuaba las presiones sobre el sector externo. Ello exigía mayor entrada de capitales para financiar dicho déficit y mantener la política cambiaria antiinflacionaria que venía predominando.

- Inexistencia de política crediticia a pesar de la baja inflación y de la entrada de capitales

A pesar de la reducción de la inflación en los últimos años, prosiguieron los depósitos de corto plazo, debido al creciente déficit externo derivado de la política cambiaria sobrevaluada y de la economía abierta y que al mantener latente el riesgo cambiario, impide depósitos de largo plazo y por lo tanto la flexibilización del crédito; para que éstos se puedan incrementar se requiere de condiciones de rentabilidad y crecimiento en la esfera productiva, así como estabilidad monetaria de largo plazo, situación que no ha acontecido en el país en los dos últimos sexenios.

En tal contexto no se puede flexibilizar política crediticia alguna, por lo que no puede haber política industrial, ni agrícola, ni fiscal, ni de crecimiento para poder modernizar la planta productiva en la perspectiva de aumentar la productividad y alcanzar una inserción eficiente y competitiva en la economía mundial.

- Se agotaron los elementos que atraían la entrada de capitales

Los elementos que hicieron posible la entrada de capitales para financiar el déficit externo y el tipo de cambio antiinflacionario ya no están operando. Se agotó el proceso de privatización de empresas públicas permitido por la Constitución del país; el presidente saliente no iba a proceder a modificarla para vender sectores de Pemex y de la CFE, ya que políticamente era inviable justificarlo; por otra parte, gran entrada de capitales se derivó a raíz de las expecta-

tivas de rentabilidad y crecimiento derivadas del Tratado de Libre Comercio; sin embargo, no obstante la economía abierta y el ingreso de México a dicho tratado comercial, ello no se tradujo en dinámica industrial, ni en crecimiento económico significativo, ni se aseguró la rentabilidad esperada, por lo que se redujo el crecimiento de entrada de capitales.

Elló afectó el comportamiento de la Bolsa de Valores en 1994, dejando ésta de ofrecer los niveles de rentabilidad mostrados en 1991, 1992 y 1993, lo que desestimuló más la entrada de capitales; se revertía así el proceso que había hecho posible la gran entrada de capitales especulativos, por lo que se pasaba a comprometer el financiamiento del sector externo y así la estabilidad monetaria-cambiaría.

- La falta de confianza deriva de los problemas económicos y no de los acontecimientos políticos y sociales

Los problemas de la economía nacional no se derivan a partir del conflicto de Chiapas, ni por el asesinato de Colosio, ni por el de Ruiz Massieu; los límites del modelo neoliberal ya se venían manifestando desde 1993; en ese año el PIB solo creció en 0.4% y la producción manufacturera decreció en 1.4%, con un déficit comercial manufacturero de 28 000 millones de dólares. Una economía que no crece y que presenta déficit de cuenta corrientes crecientes y altos niveles de endeudamiento externo, deja de ofrecer atractivos de inversión, ya que no garantiza condiciones de pago, ni de rentabilidad, además de presentar un riesgo cambiario creciente que compromete la rentabilidad real de la inversión. Por eso se frenó la entrada de capitales, lo que a su afectó las ganancias especulativas que dicho sector ofrecía, llevando a muchos a buscar mercados más seguros y rentables, repercutiendo en menores niveles de la reserva internacional. Asimismo, los tenedores de valores gubernamentales pasaron a demandar valores indizados en dólares. Lo que obligó al gobierno a introducir los llamados Tesobonos, que cubren el riesgo cambiario; a lo largo de 1994, la gran mayoría de los Certificados de la tesorería se trasladaron hacia Tesobonos, dado el riesgo cambiario, lo cual se constituía en una bomba de tiempo.

Todo esto se deriva de las inconsistencias y fragilidades generadas por el modelo neoliberal; sin embargo, sigue en el discurso oficial y de los economistas apologeticos, que el problema económico, es debido al conflicto de Chiapas y a los asesinatos de Colosio y de Ruiz Massieu; cabe señalar que hay países más conflictivos políticamente que el nuestro, tales como Colombia y Filipinas, entre otros, y no tienen los problemas económicos que padece el nuestro, porque tienen mejor competitividad y mayor capacidad productiva, y por lo tanto mejor manejo de su sector externo. El problema es que los fuertes rezagos productivos, competitivos y financieros de la economía mexicana, llevan a que cualquier conflicto político acentúe las expectativas negativas de la economía nacional y propicie la salida de capitales y frene su entrada.

- Presiones sobre las finanzas públicas a partir de la entrada de capitales

A pesar del superávit fiscal la deuda pública interna volvió a crecer, y de ahí la importancia de los Cetes y de los Tesobonos; la deuda pública interna se había reducido previamente a raíz del proceso de privatización de las empresas públicas, cuyo producto se canalizó a su pago, contribuyendo a generar el superávit fiscal. Ante la entrada creciente de capital al país, el gobierno tuvo que emitir valores gubernamentales para contrarrestar el impacto inflacionario que genera la entrada de capitales; así, con mayor deuda pública interna indizada en dólares (los llamados Tesobonos), se contribuía a financiar el déficit del sector externo, rebasando los límites de endeudamiento externo que autoriza la Cámara de Diputados; el gobierno señala que esta deuda se paga en pesos. No obstante ello, vemos la gran vulnerabilidad que ha originado, a pesar que se pague en pesos, el gobierno no lo hace por el impacto inflacionario y sobre el déficit público que ello origina, debido al encarecimiento de éstos a raíz de la devaluación; de ahí que está procediendo a conseguir mayor endeudamiento externo para financiar los Tesobonos y evitar su pago inflacionario.

- Incapacidad de pago de la economía frente a sus pasivos externos

La gran entrada de capitales que financiaron el déficit externo y el tipo de cambio antiinflacionario termina generando altos pasivos en moneda extranjera; a fines de diciembre de 1994, estos pasivos ascendían a 211 000 millones de dólares. 50 000 se ubican en la Bolsa, 29 000 en Tesobonos, 85 000 en deuda del sector público, 24 000 en deuda del sector privado no bancario, y 23 000 en deuda del sector bancario. Ello se da en un contexto en que la economía no tiene capacidad de pago alguno, con déficit externo de 28 000 millones de dólares y con reservas internacionales disminuidas; el alto riesgo cambiario y la incapacidad de pago configurada, lleva a los tenedores de Tesobonos a no renovarlos y a demandar dólares, lo que reduce más las reservas internacionales, propiciando una mayor fuga de capitales que terminó con la devaluación de nuestra moneda.

- La crisis actual es de mayores proporciones a la de 1982

La crisis actual es de mayores proporciones a la manifestada en 1982; el nivel de endeudamiento externo en 1982 era de 80 000 millones de dólares, y hoy en día hay pasivos en moneda extranjera de 211 000 millones de dólares; la deuda externa de la banca en 1982 era de 6 000 millones y hoy es de 23 000 millones de dólares; en 1982 el gobierno tuvo que nacionalizar la banca para evitar su quiebra y para socializar las pérdidas que ésta encaró; ahora la deuda de dicho sector es mucho mayor, lo que junto con el problema de las carteras vencidas, coloca en quiebra técnica a los bancos más endeudados con el exterior; en 1982 el gobierno asumió la pérdida cambiaria del sector privado a través del Fideicomiso de Cobertura Cambiaria (Ficorca); tenía activos públicos con que responder, y no obstante ello, tal política implicó déficit públicos crecientes, y fuerte recesión e inflación en la economía. Hoy, el gobierno tiene menos activos públicos y menos condiciones financieras para asumir el riesgo cambiario y para renegociar en mejores términos con sus acreedores. De ahí la presión de la banca nacional y de los acreedores internacionales, para que mediante la privatización de Pemex el

gobierno tenga recursos para hacer frente a las obligaciones financieras, como para que asuma la pérdida cambiaria de tales sectores.

El déficit de cuenta corriente en 1994 es de 28 000 millones de dólares, a diferencia de 1981 que era de 16 000 millones de dólares; el déficit comercial en 1981 fué de 3 846 millones de dólares y en 1994 fué de 24 000 millones de dólares; en 1982 era, en gran medida, un problema de pago de deuda externa; en cambio ahora el problema de la deuda sigue y el déficit de comercio exterior es de mayores proporciones: el déficit comercial externo de la industria manufacturera en 1981 fué de 18 000 millones de dólares, en cambio, el de 1994 rebasa los 30 000 millones de dólares, evidenciando el claro proceso de desindustrialización en el cual estamos; los problemas productivos que están detrás de dichos déficit son mayores ahora que en aquel entonces: la producción agrícola e industrial per cápita es menor ahora que en 1982; el nivel de desempleo era menor en 1982 que lo que es hoy en día; los salarios mínimos reales eran mayores en 1982 de lo que son ahora; los niveles de capitalización de las empresas eran mayores en 1982 (después del gran crecimiento de la inversión y producción industrial que se tuvo de 1987 a 1981), de los existentes ahora, después de la competencia desleal de que han sido objeto a raíz del contexto de economía abierta y del tipo de cambio sobrevaluado que prevaleció de 1988 a 1994; todo ello coloca a la economía nacional en una situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad para sortear los problemas actuales.

Por otra parte, los mayores problemas que enfrentan las empresas y los asalariados, dificulta la realización de acuerdos en el seno del Pacto, ya que nadie está dispuesto a sacrificio alguno.

- La inviabilidad del Programa de Emergencia Económica (PEE)

Se nos dice, por parte del gobierno, que el déficit de cuenta corriente y el tipo de cambio sobrevaluado fueron la causa de la devaluación y de la crisis, misma que se plantea encarar con el PEE; es preocupante que Zedillo haya dicho, cuando lo anunció, que hay que dejar el lastre del tipo de cambio sobrevaluado para que los cambios estructurales configuren condiciones de crecimiento económico sostenido; se insiste en acelerar los llamados cambios estruc-

turales predominantes, sin considerar que estos han profundizado los rezagos productivos, las fuertes presiones sobre el sector externo y los mayores niveles de endeudamiento externo y vulnerabilidad, que terminaron generando la crisis y la inestabilidad monetaria.

Se pretende disminuir el déficit de cuenta corriente con la devaluación y la política contraccionista, para —conjuntamente con la privatización y liberalización de la economía—, retomar el crecimiento económico; se privilegiarán políticas devaluatorias y recesivas para realizar el ajuste externo, como si éste fuera resultado de la sola distorsión de precios relativos y de exceso de demanda; no se mencionan las consecuencias derivadas de la economía abierta, de los bajos aranceles, de los fuertes rezagos productivos, de la ausencia de política crediticia, así como de política industrial y agrícola, que son factores cruciales que han originado el déficit creciente del sector externo.

El gobierno sigue con la privatización de empresas públicas, la liberalización, desregulación y extranjerización de la economía, así como con la menor participación del Estado, buscando crear condiciones de confianza al capital para retomar el crecimiento de la economía; al parecer 12 años de instrumentar dicha política para conseguir dichos objetivos le son insuficientes al gobierno para darse cuenta del fracaso de la misma.

Se continúa con políticas en favor del gran capital nacional y transnacional para que no se vaya y que siga llegando al país. Cuando se anunció este Programa se informó que se venderían los ferrocarriles, así como los puertos y aeropuertos y las autopistas que aún son del gobierno; la comunidad financiera internacional señaló que ello no generaba condiciones de confianza, ni garantía alguna de pago y estabilidad; pidió que se comprometieran en la negociación a Pemex y a la CFE; el nuevo Secretario de Hacienda tuvo que aceptar de que se colocarían bonos de mediano y largo plazo respaldados en dólares para cambiarlos por los Tesobonos, siendo Pemex la única empresa pública generadora de divisas fue colocada como garante de la deuda contraída.

El modelo neoliberal termina así comprometiendo los activos nacionales, y los ingresos derivados de los mismos; los funcionarios del gobierno tratan de convencer a los acreedores internacionales

para que otorguen mayores créditos y no retiren sus inversiones de la Bolsa, ni de Tesobonos.

El PEE contempla un déficit de cuenta corriente de 14 000 millones de dólares para 1995, una inflación de 15 % promedio anual (19% de diciembre a diciembre), y un superávit fiscal e 0.5%; tales pronósticos optimistas evidencian que el gobierno no se da cuenta de la profundidad de los problemas que han llevado a la crisis.

El déficit externo no se resuelve con base a un tipo de cambio de 4.5 pesos por dólar, ni con contracción del gasto público de 1.3% del PIB. El gobierno pretende incrementar las exportaciones en 16%, pero resulta que los productos de exportación tienen un alto componente importado; hemos venido exportando productos manufactureros porque importamos más, México no es competitivo más allá de mano de obra; el crecimiento de exportaciones manufactureras y la mayor participación de éstas en el total exportado, no se tradujo en efectos positivos sobre la balanza comercial, ni sobre la producción, ni el empleo interno; la devaluación no va a incrementar significativamente las exportaciones, debido a que encarecerá los costos de los insumos importados, contrarrestando así el efecto positivo que la devaluación tiene sobre las exportaciones; además, hay que considerar las repercusiones sobre los costos financieros que se derivan de la devaluación y de las mayores tasas de interés, dados los niveles de endeudamiento externo e interno de las empresas impedido que las empresas puedan aprovechar la nueva paridad cambiaria, sea para incrementar exportaciones o para avanzar en la sustitución de importaciones.

Con la política de ajuste se pretende disminuir las exportaciones en 8 000 millones de dólares; ello no se podrá lograr fácilmente con la devaluación, ni con la contracción del gasto y del crédito; México ha aumentado sus importaciones, no solo porque el tipo de cambio estaba sobrevaluado, sino porque la política neoliberal ha atentado sobre la inversión productiva, lo cual ha descapitalizado diversos sectores y ramas productivas; el tipo de cambio sobrevaluado hacía más barato importar mercancías que producirlas internamente, los fuertes rezagos productivos hacen que las importaciones tengan una alta inelasticidad-precio; hay que comprarlas independientemente su precio, debido a que ya no se producen internamente, de ahí que la devaluación no va a reducir fácilmente las importaciones, a no ser que se proceda a fuertes devaluaciones, lo

que repercutiría en alta inflación y en déficit fiscales crecientes, no cumpliéndose las metas antes señaladas.

Por otro lado, la devaluación será acompañada por políticas fiscales y crediticias contraccionistas para reducir el déficit de comercial externo de 24 000 millones de dólares en 1994 a 4 000 millones de dólares en 1995, para —junto a los 10 000 millones de dólares por concepto del pago del servicio de la deuda externa—, establecer un déficit de cuenta corriente de 14 000 millones de dólares; plantear un ajuste externo de esa magnitud, y realizarlo a través de políticas devaluatorias y de contracción del gasto público y del crédito, originará cierre de empresas, despidos masivos y caída drástica de salarios reales.

Se regresa a la política de ajuste que predominó de 1982 a 1987, de recesión y devaluación-inflación para disminuir el déficit del sector externo y para hacer frente a las obligaciones con los acreedores internacionales; dicha política profundizó los rezagos productivos, los cuales merman la competitividad y mantienen latentes y crecientes las presiones sobre el sector externo; al relegar la esfera productiva, no hay condiciones para avanzar en la sustitución de importaciones, ni para incrementar exportaciones en forma significativa; con la política contraccionista se profundizan los problemas estructurales que están detrás del déficit de comercio exterior; no hay pueblo ni gobierno alguno que soporten un ajuste externo de las proporciones que el gobierno espera, tomando en cuenta la magnitud del déficit, así como los efectos de la devaluación y recesión que dicho ajuste generaría.

De no reducirse el déficit externo en las magnitudes programadas, el problema es donde obtendrá el gobierno los recursos externos para su financiamiento y bajo que condiciones (que más empresas tendrá que vender, que más soberanía tendrá que comprometer), considerando la desconfianza que los inversionistas tienen para seguir canalizando recursos a la economía mexicana.

A pesar de la crisis económica actual, el gobierno prosigue con dicha política y la profundiza a través del PEE y de las nuevas iniciativas de ley que ha enviado al Congreso para avanzar en la privatización y en liberalización de la economía; se ha procedido a liberalizar al sector financiero, esto rompe con los acuerdos realizados cuando se realizó el proceso de privatización de dicho sector; se

aseguró a los compradores que serían un sector protegido; ante la firma del TLC se planteaba una liberalización paulatina hasta el 15% para el año 2005, y ahora se libera dicho sector para promover la entrada de capitales; ello se realiza en un contexto donde gran número de instituciones bancarias están en quiebra ante los altos niveles de endeudamiento externo y el impacto negativo que les origina la devaluación, así como por el problema de las carteras vencidas. ¿Cuál será la viabilidad de que los nacionales se modernicen para encarar la competencia frente a la entrada de instituciones internacionales?; asimismo, ¿Cuáles serán las implicaciones que se derivarán del comportamiento de un sector financiero controlado por la banca internacional? ¿Cuál será la viabilidad de que los nacionales controlen la política crediticia en ese contexto?; si cuando la banca estuvo en poder del gobierno, éste no la refuncionalizó para vincularla a la esfera productiva e impulsar el crecimiento sostenido de la economía, ahora que está en poder del capital privado nacional, no la puede controlar, ¿cómo el gobierno podrá controlar el funcionamiento de dicho sector, una vez que sea controlada por capital internacional?

Continuar con tales políticas, no solo será a costa de profundizar la crisis económica y los sacrificios que ello genera, sino también implicará mantener las presiones sobre el déficit externo, así como seguir otorgando mayores concesiones al capital externo para su financiamiento.

La sociedad mexicana no está dispuesta a mayores sacrificios, y menos al continuar la política neoliberal que ha desdibujado el proyecto de nación, y que ha sido la causante de la crisis económica, de las altas tasas de desempleo y de miseria, como de la pérdida de soberanía.

El gobierno insiste en continuar con la política neoliberal que ha originado la crisis. Persiste en continuar con los cambios estructurales que abrieron la economía, y que la han dejado al libre *arbitrium* de las fuerzas del mercado, lo cual ha profundizado el déficit externo, generando un contexto de alta vulnerabilidad que ha terminado con la crisis actual; dichos cambios estructurales han dejado de lado la atención de la esfera productiva, así como las condiciones para el "bienestar de la familia", y sí por el contrario han profundizado la concentración del ingreso, así como la extranjerización de la economía.

La política económica se traza cada vez más en los organismos financieros internacionales, y el gobierno instrumenta medidas para generar confianza a los grandes inversionistas extranjeros; proseguir con la política económica actual, implica profundizar la crisis, así como seguir comprometiendo los activos nacionales.

El presidente Zedillo habla de unidad; unidad ¿para qué? ¿Para seguir vendiendo al país, para seguir propiciando cambios estructurales de orientación de mercado que nos llevan a destrucción de la planta productiva, a mayor desempleo, y a la mayor extranjerización de la economía?.

Se pide mayor sacrificio, sin considerar que los salarios mínimos reales desde 1977 se vienen reajustando por debajo de la inflación; a su vez, el aparato productivo se ha descapitalizado a raíz de la economía abierta, la ausencia de políticas industriales y crediticias, y el tipo de cambio sobrevaluado que venía predominando.

Si queremos salir de la crisis, si queremos recuperar el proyecto de nación, tenemos que revertir radicalmente este modelo económico; no hay condiciones productivas, ni financieras para mantenerlo, de seguir tales políticas, será a costa de vender los únicos activos públicos que quedan, Pemex y la CFE; y el problema es que después de ello no queda nada para seguir financiando el déficit externo y para cumplir con los acreedores internacionales.

- Las garantías crediticias de Estados Unidos a México

La nueva línea de crédito de 18 000 millones de dólares, que se convertirá al parecer en garantías crediticias por 40 000 millones, no es de gratis; nadie entra a una economía que no crece, ni ofrece niveles de rentabilidad, ni tiene condiciones de pago, ni de estabilidad monetaria. Si Estados Unidos está interesado en apuntalar el peso, es para apuntalar el dólar y evitar una crisis generalizada en América Latina y en el mercado de capitales y de divisas a nivel mundial.

El problema es que la crisis actual implica el finiquito del proyecto acordado en la Cumbre de las Américas, en diciembre pasado en Miami, Estados Unidos, por todos los presidentes del hemisferio americano, donde se comprometen a acentuar su apertura y liberalización para llegar al año 2005 a un contexto de economía regional

totalmente abierta, con cero aranceles; la crisis económica de México, evidencia que no se puede dejar la regulación y reestructuración de la economía a las libres fuerzas del mercado de economía abierta, ya que ello no genera los recursos productivos y financieros necesarios para una dinámica económica sostenida.

Estados Unidos y la comunidad financiera internacional están interesados en evitar que se profundice la prolema de la economía mexicana y que ésta lleve a una crisis generalizada en toda América Latina que termine cuestionando y finiquitando al modelo neoliberal imperante.

Estados Unidos y el resto de los países desarrollados están por que prosiga el proceso de privatización de las empresas estratégicas, así como la liberalización y desregulación de las economías latinoamericanas, lo cual se ha traducido en grandes ganancias para ellos, y en mayores espacios de influencia y control.

Al intervenir financieramente en México para evitar una crisis de grandes proporciones, lo hacen a costa de imponer más sus condiciones, de supeditar más la política económica a su favor; ante la gran debilidad en que se encuentra la economía del país, Estados Unidos impone las exigencias de su participación para evitar la profundización de la crisis; al no haber condiciones productivas y financieras internas capaces de determinar crecimiento económico y estabilidad monetaria —ni a corto ni a largo plazo—, el gobierno se ve obligado a otorgar todo tipo de concesiones a los inversionistas extranjeros para que apoyen a la economía nacional; además, el gobierno se compromete a proseguir con la política predominante, de contracción del gasto público y del crédito, así como con la venta del resto de las empresas públicas y a acelerar la liberalización y desregulación de la economía.

Las garantías crediticias por 40 000 millones de dólares vienen condicionadas a que continúen los cambios estructurales de mercado, además de que serán solo para reestructurar la deuda externa vigente; será para cambiar los créditos de corto plazo, por otros de mediano y largo plazo; asimismo, gran parte de ellos serán *swaps*, cambio de pasivos por activos de las empresas que están endeudadas, tanto públicas como privadas; se incluyen en esta política pasivos de Pemex, de la CFE, así como de la banca nacional; no vendrán recursos para financiar el déficit externo, por lo que el gobierno

tendrá que restringirlo, además de acentuar el proceso de privatización de empresas públicas para promover la entrada de capitales.

El gobierno mexicano tendrá que firmar garantías de que el valor de las exportaciones petroleras, en caso de hacer uso de los créditos ofrecidos por Estados Unidos, serán depositadas en un banco de la Reserva Federal en Nueva York como garantía de que el gobierno pagará los préstamos que adquirió con el aval del gobierno de Estados Unidos; el problema es que México no tiene capacidad de pago alguna; está adquiriendo créditos de año y medio y de cinco años para hacer frente a las deudas de corto plazo, y el problema es como cubrirá dichas obligaciones el próximo año, en un contexto donde se le obliga a políticas contraccionistas; si no se genera capacidad de crecimiento, no habrá capacidad de pago, a no ser a través de drásticas políticas contraccionistas y devaluatorias que contraigan la inversión, el consumo, los salarios y toda la actividad económica, lo que generaría una crisis de mayores proporciones que la actual.

No podemos aceptar que el gobierno mexicano negocie una línea de crédito de 40.000 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para hacer frente a las obligaciones con los acreedores internacionales, a cambio de comprometer los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo, así como mantener el Tratado de Libre Comercio, disminuir más la participación del Estado en la economía, y profundizar la privatización de empresas públicas y la liberalización de la economía para llevar al predominio absoluto del capital externo en nuestra economía. No se pueden aceptar compromisos de que prosiga la política económica neoliberal, ya que ello, además de perpetuar la crisis, llevará a una mayor subordinación de la economía nacional a los intereses de la economía estadounidense.

Alternativas de política económica frente a la crisis

1. La política económica no debe priorizar el pago de Tesobonos y demás deuda pública; no se debe continuar con las privatizaciones de empresas públicas, ni con la liberalización del sector financiero, para hacer frente al financiamiento de las obligaciones con los acreedores externos; no podemos sacrificar activos nacio-

nales para hacer frente al cumplimiento de los Tesobonos; por cuestión de soberanía y seguridad nacional tenemos que plantear moratoria de tales pagos, hasta que haya condiciones de pago. La política debe atender los reclamos de la esfera productiva, de empleos y bienestar de la sociedad.

2. El déficit de cuenta corriente debe ser encarado, no con políticas devaluatorias, ni con políticas fiscales y crediticias contraccionistas, ya que ello profundizaría los rezagos productivos que están detrás de la crisis; para disminuir el déficit externo, debe revisarse el TLC y reprogramarse el pago del servicio de la deuda externa para tener condiciones financieras para encarar los problemas productivos y competitivos; no puede mantenerse el contexto de economía abierta, ya que no hay recursos con que financiarla, dicha política ha desquiciado la esfera productiva, ha aumentado el desempleo y ha profundizado las presiones sobre el sector externo que han llevado a mayores privatizaciones para su financiamiento; México está importando más de 50 000 millones de dólares (sin incluir la maquila), lo cual representa un potencial de crecimiento, tanto para los productores nacionales, como para atraer inversión extranjera directa para impulsar la producción internamente.
3. México debe decir no a la política neoliberal predominante, ya que es la causante de la crisis del predominio creciente del capital extranjero en la economía nacional, con la consecuente pérdida de soberanía.

Rechazamos la privatización de ferrocarriles, así como la liberalización de las telecomunicaciones y del sector financiero, dado el carácter estratégico de los mismos; el sector financiero no tiene condiciones de competitividad frente a las instituciones internacionales; su liberalización llevaría al predominio de los inversionistas extranjeros en dicho sector, con la consecuente pérdida de autonomía para determinar nacionalmente la política crediticia, de pagos y de crecimiento de la economía; el sector financiero debe ser nacional y debe refuncionalizarse en favor de la esfera productiva.

Los sectores productivo industrial y agrícola deben ser protegidos; no para salvaguardar ganancias monopólicas e ineficiencias como en el pasado, sino para preservar la planta productiva

e impulsar condiciones de acumulación para su modernización y generación de empleos bien remunerados, avanzar en la sustitución de importaciones y para promover exportaciones y realizar el ajuste externo desde una perspectiva de crecimiento económico.

4. La crisis actual evidencia que no se puede dejar la economía a las libres fuerzas del mercado de economía abierta; la salida de la crisis debe replantear el papel del Estado en la economía, no para volver al pasado de un Estado paternalista, ineficiente y corrupto, que no configuró crecimiento sostenido, ni bienestar para las mayorías.

Se requiere una intervención de nuevo tipo del Estado, al estilo de los países exitosos para asegurar el desarrollo tecnológico, agrícola e industrial, así como las condiciones macroeconómicas de estabilidad y crecimiento sostenido; ello no se logra con las libres fuerzas del mercado abierto, ni con políticas contraccionistas, sino regulando el comercio exterior, y el movimiento de capitales a través de reformular los instrumentos de regulación para que las iniciativas de los diversos agentes tengan consistencia y coherencia para alcanzar los propósitos de crecimiento sostenido. Para recuperar la capacidad de crecimiento se requiere revisar la asociación entre el Estado y el sector privado para estimular el desarrollo tecnológico y para articular iniciativas productivas. Ello exige a su vez: revisar la apertura externa; promover la inversión pública; interrelacionar al sector financiero con el sector productivo; incentivos fiscales para apoyar el mayor encadenamiento interno de la esfera productiva; emprender estrategias sectoriales de reestructuración productiva; revisar las relaciones obrero-patronales, que determinen mayor ingerencia de los primeros en la toma de decisiones de la empresa para asegurar el cumplimiento de las metas de producción, remuneración y crecimiento.

5. Hay que redefinir las relaciones comerciales y financieras con los países desarrollados, desde una perspectiva de desarrollo trazada por nosotros; es preciso obtener mejores tratos comerciales, así como transferencia de tecnología y flujos financieros de mediano y largo plazo para poder configurar un crecimiento sostenido de la economía; México no está solo, la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen problemas parecidos, por lo que pueden

conformarse posiciones de negociación frente a los desarrollados a nuestro favor, para frenar la pérdida de soberanía que conllevan las políticas neoliberales; hay que crear unidad nacional para construir un proyecto de desarrollo que dé cabida a todos y que preserve la soberanía nacional; la unidad latinoamericana debe darse bajo los mismos principios.

Para que todo ello sea posible se requiere de la democratización de la actuación estatal, de las asociaciones patronales, de los sindicatos, y de toda la vida nacional; solo así se podrá contar con la fuerza política necesaria para frenar las presiones externas e internas que ejercen los defensores del neoliberalismo y poder así reconstruir el Proyecto de Nación soberana que responda a las demandas de los productores, de los asalariados, desempleados y marginados del país.